

EXP. No. 1125/2010-F**GUADALAJARA, JALISCO; AGOSTO DOS DE DOS MIL
DIECISÉIS.-----**

V I S T O S: Los autos para resolver el LAUDO del juicio laboral, tramitado bajo expediente número 1125/2010-F, por ***** en contra del **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, en cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo Directo 1037/2015, del índice del CUARTO Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, el cual se realiza bajo el siguiente:-**

R E S U L T A N D O:

1.- Por escrito de fecha 22 veintidós de Febrero del año 2010 dos mil diez, la C. ***** por su propio derecho, interpuso demanda en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, reclamando como acción principal la reinstalación, entre otras prestaciones de carácter laboral.

2.- Por auto de fecha 14 catorce de Mayo del año 2010 dos mil diez, se admitió dicha demanda, en la cual se reclamaban diversas prestaciones, entre ellas la reinstalación ordenándose el emplazamiento respectivo para que el H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, diera contestación dentro del término legal con los apercibimientos inherentes, señalándose el día para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia trifásica prevista por el numeral 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- La demandada compareció oportunamente a dar contestación, por lo cual el día 02 de Julio del año 2010, se dio inicio al desahogo de la audiencia establecida en el artículo 128 de la Ley Burocrática Estatal, en la cual en la etapa e a

CONCILIATORIA se declaro cerrada debido a la cerrada debido a la imposibilidad llegar a un arreglo y procediéndose a abrir la etapa de DEMANDA y EXCEPCIONES, en la cual la parte actora amplio su ocursu de demanda, suspendiéndose para dar oportunidad a la que la demandada emitiera contestación oportuna, reanudándose con fecha 20 de Julio del año 2011 dos mil once a las partes, en la cual se tuvo a las partes ratificando sus respectivos ocursos escrito de demanda, ampliación y contestación; en Ofrecimiento de pruebas, se tuvo a la parte Actora y a la demandada ofreciendo los elementos de pruebas que a su representación correspondieron, resolviéndose sobre la admisión de las mismas mediante acuerdo de fecha 02 dos de Diciembre del año 2011 dos mil once, las que una vez que fueron desahogadas, por acuerdo del 07 siete de Enero del año 2015 dos mil quince, se declaró concluido el procedimiento y se ordenó, poner los autos a la vista del Pleno y emitir el Laudo correspondiente, el cual fue emitido el veinticinco de Agosto de dos mil quince.-----

4.- Luego, en contra de ese laudo la quejosa *****, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, el cual le fue concedido en los términos indicados en la ejecutoria de Amparo Directo 1037/2015, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, dejando insubsistente el laudo reclamado y ordeno emitir otro, conforme los lineamientos del amparo concedido.-

En cumplimiento a ello, por acuerdo del once de Julio de dos mil dieciséis, se dejo insubsistente el laudo combatido y se ordeno emitir otro en los términos destacados en dicha ejecutoria, el cual hoy se dicta en base al siguiente:-----

CONSIDERANDO:

I.- Este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver el presente juicio en los términos establecidos en el artículo 114 fracción 1 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.-La personalidad y personería de las partes quedó debidamente acreditada en autos en los términos de los artículos 121 y 122 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

III.- La parte actora funda su demanda en los siguientes hechos:

“...HECHOS PARTE ACTORA FOJA 2

1.- Ingrese a laborar para la demandada el día 15 DE MARZO DEL 2008, desempeñando el puesto de “COLABORADOR C”, con un horario de Lunes a Viernes de las 15:00 a las 21:00 hrs. hasta que fui cesada injustificadamente por la demandada.

2.- El salario que percibía era el de la cantidad de \$9,400.00 mensual, dicho sueldo de acuerdo a los recibos de nómina que firmaba y que obran en poder de la Demandada.

3.- La que suscribe siempre laboró con eficacia, en buena armonía y las relaciones laborales con mis superiores siempre fueron cordiales y correctas; sin embargo, el día 29 de Enero del año 2010, alas 15.15 hrs. en la puerta de ingreso y salida de la Oficina que ocupa la demandada, cito DIRECCIÓN DE CONTACTO CIUDADANO, en la UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA, cito la calle 5 de Febrero #249, Zona Centro Guadalajara, Jalisco, fui cesada de manera injustificada por el C. Lic. *****, quien se ostento como DIRECTOR DE CONTACTO CIUDADANO de la entidad demandada, y ante la presencia de varias personas que se encontraban ahí presentes, me manifestó; “ESTAS DESPEDIDA”.

El proceder de la demandada, considero eso fue totalmente indebido y por tanto el cese es totalmente injustificado, ya que no se no llevó a efecto el procedimiento ordenado por el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; Además que no dio causa ni motivo alguno para que se le pudiera cesar; violando sus derechos y el principio de la estabilidad el empleo que todo Servidor Público en el Estado de Jalisco tienen.

AMPLIACIÓN A LA DEMANDA FOJA 26

II. - CAPITULO SEGUNDO AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS HECHOS

1).- a) En relación al primer punto de hechos del escrito inicial de demanda, se aclara y se corrige de la siguiente forma: La actora ingreso a trabajar al H. Ayuntamiento de Guadalajara, el día 5 de marzo de 2008, para el puesto de colaborador C y posteriormente fue contratada como SUPERVISOR B. ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL ÁREA DE CONTACTO CIUDADANO, y con un horario de las 3 de la tarde a las 9:00 de la noche de lunes a viernes, trabajando horas extras sin que me fueran pagadas tal y como lo he expuesto en la letra F del primer capítulo de este escrito, todo lo cual en obvio de repeticiones lo reproduzco en estos momentos. Teniendo dicho nombramiento con el carácter de definitivo de acuerdo al artículo 16 fracción I de la Ley Para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; ocupando una base y plaza creada en el ayuntamiento en forma definitiva.

2.- En relación al segundo punto de hechos del escrito inicial de demanda, se agrega que además del sueldo indicado, la actora tenía como prestaciones adicionales a su sueldo mensual la despesa por \$***** M.N. quincenal y la ayuda para el transporte de \$***** M.N. quincenalmente.

3.- Respecto al tercer punto de hechos de la demanda inicial se aclaran los mismos de cómo se desarrollaron en relación al trabajo de la actora y de su cese o despido injustificado en el día 29 de enero del presente año 2010 las 16:00 horas, en el lugar y personas que he señal en el escrito j inicial de demanda.

Con todo lo expuesto resulta claro y evidente que al ser cesada por el demandado, este no tomó en cuenta para nada mis derechos que concede la Ley al estar y terminar el Servicio Civil de Carrera, lo cual hace que le cese sea totalmente injustificado y que son procedentes las acciones que ejercito de reinstalación el ejercicio de mi derecho de inamovilidad, y prestaciones económicas que reclamo.

Capítulo Tercero

FUNDAMENTOS PARA ACREDITAR QUE EL CESE FUE INJUSTIFICADO Y ACREDITAR LA PROCEDENCIA D ELAS ACCIONES INTENTADAS POR LA ACTORA:

I.- Argumentos que puede hacer valer el Ayuntamiento para justificar el cese o termino de la relación de trabajo con la actora:

El ayuntamiento demandado para justificar el cese o la terminación de la relación de trabajo con la actora, puede tal vez pretendo fundarlo en los siguientes presupuestos:

a) La actora fue contratada por tiempo determinado y al concluir dicho término el nombramiento se dará por terminado.

b) La actora fue contratada como servidor pública con el carácter de confianza y se puede dar por terminada la relación de trabajo ya que no se le tiene confianza.

Con todo lo expuesto estos supuestos legales no se dan en el caso de la actora por los siguientes razonamientos y fundamentos:

II. En el caso de la actora, si el Ayuntamiento demandado quisiera hacer valer tiempo determinado, no se aplica, ya que la actora como lo he mencionado en los hechos, fui contratada en forma definitiva de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 16 fracción I de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; ya que mi nombramiento fue por tiempo indefinido para ocupar una planta de Supervisor "B" que se tiene en el Ayuntamiento demandado desde que ingresé, mi puesto estuvo catalogado en la plantilla de servidores públicos como necesario permanente, es una plaza de planta nunca he tenido el carácter de eventual o de supernumerario; por mi antigüedad y por todo lo expuesto tengo el derecho a la estabilidad en el empleo máxime que laboré hasta el 29 de enero del 2010 y en su caso el demandado estuvo conforme en que mi relación de trabajo

continuara; porque en caso contrario debería de terminarla desde el primer día en que la actual administración municipal ingreso.

III. Razonamiento y fundamentos para acreditar lo injustificado del caso y la procedencia de las acciones intentadas por la actora:

A. De acuerdo con la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Regla General es que el servidor público de acuerdo con el artículo 16 fracción 1, se contratan en forma "Definitiva"; es decir por tiempo indefinido esta Ley también autoriza la celebración del contrato individual de trabajo por tiempo determinado o fijo, de acuerdo a las fracciones II, III, IV, y

y.

Ahora bien, estas excepciones no se dan en el siguiente caso por los siguientes fundamentos:

La fracción II resulta clara y evidente que no se aplica, ya que la actora no fue contratada en forma DE INTERINO, para ocupar una licencia de algún servidor público que no excediera de tres meses.

La fracción III del citado artículo XVI igualmente resulta NO APLICABLE en este caso ya que la actora no fue contratada como PROVISIONAL, para suplir licencia mayor a seis meses.

La fracción V del 16 tampoco tiene la aplicación ya que como lo dice el propio ayuntamiento no fue terminada por obra determinada.

La fracción IV del citado 16, permite el contrato por tiempo determinado; y es en esta excepción que el ayuntamiento demandado pretende justificar la terminación de la relación de trabajo, ya que efectivamente al principio firmo movimientos de personal por tiempo determinado; y suponiendo sin conceder que fuera procedente este argumento, **el mismo carece de validez; ya que la ley permite el tiempo determinado pero solo cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a realizar; y en estos casos carece de validez el tiempo determinado si en el documento no se expresa la naturaleza del trabajo que se va a prestar, que se justifique la excepción a la norma general;** es decir el contrato por tiempo determinado solo puede concluir el vencimiento del término pactado, cuando se ha agotado la causa que le dio origen, LA CUAL DEBE SER SEÑALADA EXPRESAMENTE A FIN DE QUE SE JUSTIFIQUE LA TERMINACIÓN PARA QUE NO EXISTA RESPONSABILIDAD PATRONAL. Lo anterior resulta claro y evidente, el Ayuntamiento puede contratar por tiempo determinado, pero no como una gracia concedida y poder pisotear la estabilidad del trabajador, es su obligación exponer en el nombramiento o en el movimiento de personal o documento que elabore, el porqué se contrata por tiempo determinado, que se manifieste la causa y razón del origen y necesidad del tiempo determinado ya que repito no puede hacerlo simplemente por gusto, por capricho o para evadir responsabilidad patronales; mencionar la causa o impedimento de la excepción n que tuvo para no hacer el contrato en forma definitiva.

El criterio o fundamento anterior ha sido sostenido por tesis jurisprudencia

SI EN EL CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO NO SE EXPRESA ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 37 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LIMITAR SU DURACION, ESE CONTRATO DEBE DE CONSIDERARSE CELEBRADO POR TIEMPO INDETERMINADO, CONSEQUENTEMENTE LA SEPARACION DEL EMPLEADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO ES INJUSTIFICADO....

CONTRATO DE TRABAJO PARA OBRA DETERMINADA. CARGA DE LA PRUEBA....

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, CARACTERÍSTICAS Y PRORROGA DEL...

En el caso particular de la actora, como se probará en su oportunidad el documento elaborado por el demandado no contiene las explicaciones, los fundamentos, las causas, las razones, los orígenes del porque fue contratada por tiempo determinado y consecuentemente resulta claro y evidente que el fundamento que quiere hacer valer el demandado para justificar la injusta terminación de la relación de trabajo con la actora carece de validez y debe de considerarse como un cesa injustificado y que son procedentes las acciones intentadas de reinstalación de inamovilidad y el pago de salarios caídos.

B. Además de lo expuesto en el anterior apartado, uno de los fundamentos para que se declaren procedentes mis acciones, es que tengo a mi favor la inmovilidad en su puesto en efecto de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6 parra lo ultimo de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone claramente: "Los servidores públicos supernumerarios una vez contratados de manera definitiva podrán solicitar les sea una computada la antigüedad desde su primer contrato para efectos del servicio civil de carrera; sin embargo al tener mi nombramiento definitivo, automáticamente tengo el derecho de integrarme al procedimiento del Servicio Civil de Carrera el cual de acuerdo al artículo 157 de la Ley Burocrática de Jalisco es obligación del ayuntamiento demandado instalarlo en su entidad; y de acuerdo al artículo 159 claramente dispone.....

Como lo e expuesto al tener mi puesto el carácter de definitivo ocupando una plaza permanente y necesaria y que forma parte de la plan tilia de servidores, tengo a mi favor la estabilidad laboral y la inamovilidad tal y como lo dejé expuesto en el numeral 4 del capítulo segundo de este escrito, todo lo cual en obvio de repeticiones lo reproduzco en estos momentos para acreditar y fundamentar la procedencia de mis acciones y prestaciones que ejercito y reclamo.

Al dar por terminada la relación de trabajo como lo hizo el demandado, por los argumentos expuestos actuó en forma totalmente injustificada, ya que sin tener causa o razón me privan de mis derechos e incluso me privan de mis planes de vida, al privarme de mi calidad de servidor público definitivo y de ejercer y tener los derechos que dicho nombramiento me concede incluyendo el de mi inamovilidad, por lo que la reinstalación demandada debe declararse procedente.

C. Además de todo lo expuesto, con lo que considero se demuestra la procedencia de las acciones; el otro argumento o

razón que pretende hacer valer el demandado de que la actora al ser contratada como empleada de que la actora al ser contratada como empleada de confianza, no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, fundándose en lo dispuesto por los artículos 8 y 16 párrafo último de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios ya que de acuerdo con estos preceptos se dice que los servidores públicos de confianza serán siempre contratados por tiempo determinado por los que por esta causa se dio por terminada la relación de trabajo con la actora; esta causa argumentada con todo respeto no tiene aplicación en el presente caso, ni justificada la terminación de la relación de trabajo por los siguientes razonamientos.

1.- Suponiendo sin conceder que la actora tuviera el carácter de confianza, en su caso no se aplica el citado artículo 8, ya que este claramente dispone que este claramente dispone que su nombramiento será por tiempo determinado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, y en el caso de la actora como se ha expuesto en el apartado B, de este capítulo tercero fue nombrada con documento con el carácter de definitivos; por tanto no se aplica el citado 8 por lo dicho en el apartado B, todo lo cual en obvio de repeticiones se reproduce en estos momentos.

Igualmente el citado párrafo último del artículo 16, tampoco tiene aplicación en el presente caso; ya que suponiendo sin conceder que la actora tuviera el carácter de confianza su puesto o cargo que desempeña no se encuentra dentro de lo que dispone dicho precepto, ya que el mismo solamente señala los puestos de: Secretarios, subsecretarios, directores generales y directores de área (esto conforme a la reforma de este artículo el 18 de diciembre del 2009) y si la actora no tiene puesto o cargo que señala este precepto el mismo no es aplicable y no puede ser fundamento para justificar la terminación de la relación de trabajo con la actora.

2.- Pero lo más importante es que a la actora indebidamente se le considere como de confianza por el ayuntamiento demandado; ya que por las funciones y trabajos que desempeñaba **no se le puede ni debe de considerarse como de confianza; en efecto para que un servidor público pueda tener el carácter de confianza debe de desempeñar o hacer las funciones que establece el artículo 4 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien estar listado su puesto en la fracción III por tratarse de un municipio del demandado. LA ACTORA NO DESEMPEÑABA NINGUNA FUNCIÓN DEL CITADO ARTICULO ni tampoco su puesto está incluido en la fracción III del artículo citado.**

A sido criterio sostenido por jurisprudencia, de que el carácter de confianza de un trabajador al servicio del estado, **no se determina por su denominación si no por las funciones o trabajos que realice**, no basta que el ayuntamiento demandado diga que el actor es de confianza, para que esto sea así y así se considere se requiere que la actora realizara funciones dispuestas por la Ley para que se le considere de confianza; la jurisprudencia que se hace valer es la siguiente:

TRABAJOS AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, ESTE CARÁCTER NO SE DETERMINA POR LA DENOMINACIÓN QUE DEL PUESTO DE HAGA EN EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO...

Las funciones o trabajos que se ejecutaba eran las siguientes:

- Atender las llamadas a la línea telefónica 070 del Ayuntamiento, que realizaban los ciudadanos, respecto de quejas, peticiones o sugerencias que tenían del ayuntamiento.
- Proporcionar información a través de la línea telefónica sobre las funciones y organización del ayuntamiento.
- Elaboración de reportes y registros de las llamadas entrantes.
- Canalizaba las peticiones que ciudadanos a través de la línea dependencias correspondientes.

Conforme a las funciones la actora NO TIENE EL CARÁCTER DE SERVIDORA PÚBLICA DE CONFIANZA; por lo que en consecuencia de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3 fracción 1 y 5 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, se le debe de reconocer el carácter DE SERVIDORA PUBLICA DE BASE.- Y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 de la misma Ley:

IV.- Además de todos los fundamentos y razones que he mencionado, para acreditar el cese o despido injustificado hago valer para el mismo objeto, que la forma, el modo y las actuaciones del ayuntamiento demandado al ejecutar el cese en mi contra viola preceptos legales y constitucionales, dejando sin efecto mis derechos principalmente la estabilidad en el empleo e inamovilidad que tengo a mi favor como derecho público subjetivo y que son los siguientes:

Artículos 5, 115, 123 y (sic) 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 7, 10, 11 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus municipios y artículos 2, 3, 4, 6, 17, 18 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria.

El cese o despido injustificado, violan en mi perjuicio los preceptos constitucionales referidos por las siguientes razones y fundamentos. En primer lugar al impedir que siga trabajando y que se respeten mis derechos laborales y que mi estatus laboral quede debidamente con las prestaciones y prerrogativas que deben tener todos los trabajadores viola el artículo 5 constitucional que consagra la garantía que a ninguna persona podrá impedirse que se dediquen a sus profesión, industria o trabajo que le acomode siendo ilícito, y además dispone que el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por disposición judicial. Esta disposición garantiza la completa libertad de trabajo que consistente en que como trabajador o servidor público se tiene el derecho de dedicarnos al trabajo siempre que no. se afecte a otra persona; al impedir las demandadas que siga laborando en el trabajo que realizo que es de naturaleza permanente y necesario para el ayuntamiento de Guadalajara que trabajo, tal y como lo reconocieron al efectuar la forma y términos en que he señalado aconteció mi despido, violan este precepto.

Al violar la demandada esta garantía de libertad individual que consagra el artículo 5 Constitucional se viola igualmente en mi perjuicio en primer lugar lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al

disponer que es servidor público, toda persona que preste un trabajo subordinado a las entidades públicas, se viola igualmente el artículo 7 de la misma es precisamente para que se considere trabajador definitivo, de acuerdo al artículo 10 se debe aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo y los actos reclamados violan en primer término juntamente con el artículo 5 constitucional, los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo: se viola el artículo 2 que norma los principios fundamentales de las relaciones de trabajo de que todas las normas tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social y con los actos reclamados impiden se de cumplimiento a esta norma de orden público, igualmente violan el artículo 3 ya que al artículo 4 ya que las resoluciones o actos demandados están impidiendo el trabajo al suscrito como servidor público, al impedir con el cese reclamado que mi status jurídico principalmente el derecho de estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 123 constitucional. Esta libertad del trabajo y el derecho al mismo como lo ordena el artículo 5 constitucional solo podrá impedirse por resolución judicial y en consecuencia para que las demandas pudieran impedir el derecho que tengo como trabajador y servidor público en su caso deben de llevar a cabo los procedimientos que he señalados en el cuerpo de esta demanda.

El despido injustificado, Igualmente se considera que violan el artículo 115 Constitucional ya que con los mismos las autoridades demandadas, incluso violan su propia autonomía municipal y específicamente lo dispuesto por la fracción VIII que claramente ordena que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y teniendo como base lo ordenado y dispuesto por el artículo 123 Constitucional y sus disposiciones reglamentarias. Y como lo he mencionado las demandadas con el despido violan totalmente los preceptos legales aquí señalados independientemente de que además su acto del despido no está debidamente fundado y motivadas como se hará valer más adelante.

Igualmente resulta claro y evidente que el acto de despido impugnado ejecutado por las demandadas, violan totalmente el artículo 133 Constitucional; que sin duda es uno de los preceptos constitucionales más importantes ya que consagra o dispone la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre todas las normas del derecho del país, este precepto claramente ordena y dispone que nuestra propia constitución, que las leyes del congreso de la unión que emanen de la constitución Y TODOS LOS TRATADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA MISMA QUE SE CELEBRE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON APROBACIÓN DEL SENADO, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN; ordenando este precepto constitucional que todas las autoridades de cada estado deberán ajustarse a nuestra constitución, a las leyes señaladas y a los tratados internacionales incluso a pesar de que hubiera disposiciones en contrario que pueda ver en las constituciones o leyes de los estados. En el mismo sentido lo ordena la norma de orden público el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la constitución deben ser aplicables a las relaciones de trabajo como el acto reclamado ejecutado por las demandadas en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de la vigencia.- El cese

o despido reclamado dictado por la demandada, violan los preceptos constitucionales y legales mencionados ya que sin tomar en cuenta lo dispuesto por tratados internacionales dictan su resolución violándolas y en consecuencia perjudicando gravemente el estatus laboral y jurídico de los servidores públicos; en efecto el cese injustificado violan el tratado internacional o CONVENIO 111 que fue aprobado como tratado internacional y que entró en vigor el 15 de junio de 1960 y que el CONVENIO RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO OCUPACIÓN artículo 1 ordena ARTÍCULO 2 Igualmente se viola el tratado internacional o convenio 142 cuyo título.., es CONVENIO SOBRE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS el cual entró en vigor desde el 19 de julio 1977 , se considera claro y evidente que con el despido injustificado reclamado se impide desarrollar mis aptitudes para el trabajo al impedir que siga trabajando y que mi estatus laboral quede debidamente determinado. El despido injustificado reclamado igualmente viola el tratado internacional 150 cuyo título es CONVENIO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, COMETIDO FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN el cual entro en vigor desde 1978 artículo 1...., las demandadas al no tomar en cuenta como se ha expresado en este escrito, violan el 133 y los demás preceptos constitucionales y legales señalados.--

Igualmente la demandada, violan con el cese el artículo 14, 16 y 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Artículo 14 Constitucional ordena en su párrafo segundo: "que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". En absoluto resulta evidente e indiscutible que la regla o principios de la legalidad que contiene esta garantía de seguridad jurídica ha sido violada en perjuicio del suscrito, por las demandadas, al pretender con el despido injustificado señalado privárseme de sus derechos, pro piedades y posesiones que tengo como trabajador. Igualmente se viola este principio, por las violaciones cometidas pos las demandadas a los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y a los principios establecidos por el Artículo 123 Constitucional, que consagra las garantías sociales.

Igualmente el cese la garantía de seguridad jurídica del Artículo 16 Constitucional, en perjuicio del suscrito. En efecto, la garantía de legalidad jurídica consagrada por este precepto constitucional, es el que mayor preservación imparte al gobernador dentro de nuestro orden jurídico; ya que mediante esta garantía se protege todo el sistema del derecho objetivo que gozamos: esta garantía se contiene en la expresión "fundamentación y motivación" y, consiste en que los actos que originen hasta una simple molestia, las autoridades lo deben de basar en una disposición. Y la motivación, implica que existiendo una norma relativa al caso o situación concreta respecto de los que se pretenda cometer o realizar, el acto de autoridad sea de aquellos a que alude la disposición fundatoria, o sea que las circunstancias y modalidades del caso particular y concreto cuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley: y toda facultad que la ley da a una autoridad para desempeñar

determinado acto frente al gobernado, tiene límites necesarios que se establecen en la propia norma. Por lo tanto se con figura la contravención al Artículo 16 Constitucional, cuando el cese no se apoya en ninguna ley.

Oferto los siguientes medios de convicción, con la finalidad de justificar su acción.

CONFESIONAL: SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DEMANDADO el C. HÉCTOR PIZANO RAMOS.

CONFESIONAL DE HECHOS PROPIOS: *****.

CONFESIÓN FICTA: Consistente en todos los reconocimientos que el Ayuntamiento Demandado, ha efectuado en su escrito de contestación de demanda.

DOCUMENTAL: Consistente en 7 copias fotostáticas de recibos de nomina correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009.

Se ofrece para su perfeccionamiento el cotejo con sus originales.

TESTIMONIAL: *****E *****.

INSPECCIÓN OCULAR.- El periodo que abarcara es del mes de marzo de 2008 al mes de enero de 2010. Los documentos que se deben de examinar son, expediente personal, archivo y registro de nominas y por último el registro de alta de los Servidores Públicos al Servicio Civil de Carrera.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

IV.- La demandada dio contestación a los hechos, argumentando lo siguiente:

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS FOJA 12

(sic).... **1 y 2.-** Es cierto que el 15 de marzo de 2008, fue contratada para desempeñar el puesto de Colaborador "C", también es cierto el horario de las 15:00 a las 2 1:00 horas de lunes a viernes con media hora de descanso para tomar alimentos fuera de la fuente de trabajo, asimismo, se reconoce el salario menos las deducciones legales que se le aplicaban cada fecha de pago. Sin embargo,

omite mencionar que con fecha 1º de noviembre de 2009 presentó RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE al cargo antes mencionado ante el entonces Presidente Municipal Interino, Licenciado Juan Pablo de la Torre Salcedo, por lo tanto, a partir de esta fecha inicia su relación laboral con nuestra representada.

3.- Es cierto que las relaciones entre la actora y nuestra representada siempre fueron en los mejores términos, sin embargo, como ha quedado de manifiesto no se le cesó de sus labores ni en forma justificada ni injustificada, y mucho menos, en los términos y condiciones que señala, y tampoco se dieron los hechos narrados por ella misma, siendo falso además que es tuviera obligada a laborar con posterioridad al 31 de diciembre del 2009, fecha en la cual su nombramiento feneció, conforme a la naturaleza del mismo y a lo expuesto por la Ley en los artículos 3, 4, 8 y 16 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, artículos adicionados y reformados con fecha 22 de febrero del 2007 con efectos desde el día 23 de febrero del 2007. La realidad de los hechos es que la actora terminó sus labores de manera normal el día 31 de diciembre de 2009, recibiendo el pago de todas y cada una de las prestaciones pendientes, y con posterioridad a esa fecha ya no volvió a sus labores, precisamente porque no tenía obligación de hacerlo en virtud del término de su nombramiento. Entonces, es falso lo que señala la accionante en cuanto a que fue despedida injustificadamente ya que mi representada nunca la despidió ni justa y menos aún injustificadamente, pues ésta nunca dio motivo para tal situación, aunado a que la actora es de los servidores públicos considerados de confianza, de cualquier forma nunca se le despidió de su trabajo, aunque se le pudo haber despedido ya que éstos no tienen derecho a la estabilidad laboral, surtiendo efecto en éste caso la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis, misma que a la letra dice:

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE... -

Por ello, el hecho que narra la actora no ocurrió ni en los términos que menciona ni en otros diversos. Incluso al momento de resolver, debe considerarse que los nombramientos de confianza en este supuesto no pueden prorrogarse, dado que no puede pretenderse que una vez concluida su vigencia proceda reclamar un derecho que jurídicamente no existe, ni está protegido por la ley, en virtud de que el servidor público saliente o una vez que termine el plazo que abarca su nombramiento, ya no es titular del nombramiento que se le otorgo por un periodo determinado y la duración de la relación laboral no puede ser ampliada por la sola pretensión del servidor público, máxime que en la Legislación Local vigente no está constituido ese derecho, ya que la decisión de otorgar un nuevo nombramiento constituye una facultad discrecional conferida por la norma a los Titulares del Gobierno y de sus Dependencias, en su caso. Estimar lo contrario, llevaría al extremo de adquirir la estabilidad en un puesto público por el simple transcurso del tiempo, lo que resulta contrario a derecho, ya que este no se encuentra como un bien dentro del comercio, ni está

sujeto a transacción alguna y, en tal concepto, no puede ser adquirido por prescripción positiva, luego entonces, carecen de fundamento los hechos y los preceptos de derecho que el actor pretende valer.

CONTESTACIÓN A LA ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN A LOS HECHOS FOJA 45

(sic)...En cuanto a la aclaración y ampliación de los hechos:

(Capítulo segundo)

En cuanto al punto 1.- Se reitero que se reconoce la antigüedad, el puesto y el horario, sin embargo, es falso que el actor trabajara tiempo extraordinario como lo menciona en este punto, ya que siempre contó con un horario de las 15:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes de cada semana con media hora para tomar alimentos fuera de su centro de trabajo, por tanto, desde este momento, se opone la excepción de prescripción en términos de lo establecido por el artículo 105 de la Ley burocrática, en el sentido de que prescriben en un año aquellas prestaciones que no se hubieren reclamado después de un año que nació su derecho para reclamarlos, luego entonces, la accionan te pierde su derecho al pago de ésta reclamación por el solo transcurso del tiempo, pero, con independencia de lo anterior, el reclamante omite mencionar que días de la semana laboro jornada extraordinaria y la totalidad de las mismas, así como el monto por el cual deberán de ser cubiertas las supuestas horas extras laboradas, dejando a esta parte demandada en estado de indefensión para controvertir adecuadamente a esta prestación y a la autoridad ante la imposibilidad jurídica de dictar una condena al respecto.

En cuanto a los puntos 2.- Como ya se manifestó en la contestación al inciso "H", se niega la procedencia relativa al pago de despensa y ayuda de transporte ya que estas son prestaciones extralegales que no están contempladas en la Ley Federal del ni en la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tanto, corresponde al accionante probar su procedencia. Pero suponiendo sin conceder que no se le hubieren cubierto, se opone desde éste momento la excepción de prescripción que establece el artículo 105 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.

En cuanto al punto 3.- Como ya se manifestó en la contestación a la demanda y como se ha venido reiterando al contestar estas ampliaciones y aclaraciones; es falso que el actor ha a sido es pedido de su empleo en forma justa o injustamente, y mucho me os en los términos y condiciones que señala, además, jamás se di ron los hechos narrados por ella misma. Lo cierto es que el nombramiento de la accionan te feneció el día 31 de diciembre del 2009 como a se manifestó en la contestación a la demanda aunado al hecho que omite mencionar que con fecha 5 de junio de 2008 presentó RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE al cargo anies mencionado ante el entonces Presidente Municipal, docto Alfonso Petersen Farah, por lo tanto, a partir de ésta fecha inicia su relación laboral con nuestra representada. Aunad a (sic) que la actora contaba con nombramiento de confianza motivos por los cuales, no goza de la estabilidad en el empleo como ya se ha venido manifestando tanto en la contestación a la demanda

como en la contestación a estas ampliaciones. Nuevamente se reitera que es falso que a la actora se le haya despedido ni justa menos aun injustamente, mucho menos en los términos y condiciones que refiere. Y por lo que respecta a la existencia del Servicio Civil de Carrera, es necesario manifestar que éste tema no tiene relación alguna con la litis, por tanto, no se contesta al respecto.

Contestación al capítulo tercero.

Respecto a todas y cada una de las manifestaciones vertidas por el accionante en éste capítulo, es necesario hacer algunas precisiones importantes; en primer lugar, tales consideraciones están fuera de contexto ya que, estas no tienen absolutamente nada que ver con la litis planteada. En segundo lugar, esta parte que representamos, considera que tales afirmaciones carecen de toda lógica y sentido jurídico pues son expresadas con el único fin de desviar la atención y la buena fe de la autoridad que conoce del presente juicio al referirse a cuestiones meramente doctrinales cuyo contenido, no es precisamente la resolución de los puntos controvertidos porque ya están contenidas en la Ley burocrática y en la Ley laboral, lo cual denota, de parte del accionante, el ánimo de prolongar las etapas procesales pues tales declaraciones no tienen absolutamente nada que ver con la litis planteada por el propio actor, por ello, resulta por demás ocioso atender a ellos de lo contrario se estaría entrando en la misma dinámica que mi contra parte y con ello entorpeciendo el sano proceso del presente juicio.

La Demandada ofreció las siguientes pruebas:

I.- CONFESIONAL; A CARGO DE LA TRABAJADORA ACTORA
*****.

II- TESTIMONIAL (DE MANERA VERBAL FOJA 97 DE AUTOS): C.C.
***** , *****y *****..-

III.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

IV.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

PRUEBAS DE MANERA VERBAL PARTE DEMANDADA FOJA 90
VUELTA DE AUTOS

“...**V DOCUMENTAL**, consistente en 02 hojas de nomina de fechas 15 de diciembre del 2009 y 18 de Septiembre del 2009, en caso de ser objetada por la parte actora se ofrece para su perfeccionamiento la ratificación de firma y contenido... **VI DOCUMENTAL** consistente en una carta renuncia con carácter de voluntaria e irrevocable, en caso de ser objetada por la parte actora se ofrece para su perfeccionamiento la ratificación de firma y contenido...**VII DOCUMENTAL** consistente en una hoja de movimiento de personal y/o nombramiento a favor de la Actora, en caso de ser objetada

por la parte actora se ofrece para su perfeccionamiento la ratificación de firma y contenido..."

V.- Una vez hecho lo anterior, la **LITIS** en el presente juicio se fija para efectos de determinar si como lo expresa la actora, fue despedida el día 29 veintinueve de Enero del año 2010 dos mil diez a las 15:15 horas en la puerta de ingreso y salida de la Oficina que ocupa la demandada, en la Dirección de Contacto Ciudadano, en la Unidad Administrativa Reforma, cuando el C. *****, quien se ostenta como Director de Contacto Ciudadano de la entidad demandada, le manifestó que estaba despedida; contrario a ello el H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, manifiesta que lo que realmente ocurrió es que el nombramiento llegó a su fin el día 31 de Diciembre del año 2009 dos mil nueve.-----

En razón de lo anterior, la litis se constriñe en determinar en primer término, de acuerdo a los hechos expuestos en vía de defensa y excepción por parte de la demandada si el nombramiento es considerado por Tiempo determinado, y si este cuenta con los elementos para así-considerarse, y una vez hecho ello en caso de no justificarse se entrara al estudio de la inamovilidad que peticiona, por tanto, se arriba a la determinación que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, es a la Entidad demandada a quien le corresponde demostrar que la relación entre las partes, se dio mediante un nombramiento por tiempo determinado, y que dicha relación concluyó, en virtud de que feneció su vigencia el 31 treinta y uno de Diciembre de 2009 dos mil nueve, y en caso de no justificarse lo antes descrito se entrara al estudio de la citada inamovilidad reclamada.---

Lo anterior conforme a lo establecido en los siguientes artículos:

“Artículo 784.- La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I.-Fecha de Ingreso del trabajador.

II. - Antigüedad del Trabajador.

III.- faltas de asistencia del trabajador.

IV- Causa de rescisión de la relación de trabajo;

V.- Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III de esta Ley. (lo subrayado es de este Tribunal);

VI...

VII. El contrato de Trabajo

VIII.-...

IX....XIV.

Artículo 804.- El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

I.- Contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo que a continuación se precisan:

II.- Lista de Raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, o recibos de pago de salarios:

III. Controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo,

IV.- Comprobantes de pagos de participación de utilidades, vacaciones de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley.

V...”.

De los dispositivos anteriores se infiere que al tratarse de una causa de terminación de trabajo al alegarse una temporalidad de nombramiento, así como la calidad de confianza, es a la entidad demandada H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, a quien corresponde la carga probatoria, esto es, durante el procedimiento debió de justificar con medio idóneo de probanza, que realmente la relación laboral concluyó en la data señalada, por lo cual se procede al estudio adminiculado de los medios exhibidos de convicción, ello a la luz de lo dispuesto por el dispositivo legal 136 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual impone la observancia de los principios rectores del procedimiento laboral Burocrático esto Verdad Sabida y Buena fe Guardada y a la letra establece:

“Artículo 136.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en el laudo las consideraciones en que se funde la decisión.”

Por tanto al tomar en consideración de manera preponderante la documental exhibida como número siete por el H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, consistente en una propuesta y movimiento de personal se desprende que ampara el desarrollo del cargo de la actora con fecha de inicio del 01 primero de Noviembre de 2009, con característica de confianza, en el cargo de supervisor “B”, mismo que se encuentra suscrito por la propia accionante, así como el Director de Contacto Ciudadano y el Director de Recursos Humanos, elemento de convicción al cual se le otorga un valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Burocrática Estatal, con trascendencia en la litis.-----

Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo Directo 1037/2015, del índice del CUARTO Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, se determinó que de acuerdo a los movimientos de personal que fueron ofrecidos por el ayuntamiento demandado y por la actora, se aprecia que la servidora publica firmó un nombramiento indicando el puesto en la Dirección de Contacto ciudadano como “colaborador C”, el quince de marzo de dos mil ocho, y del cual renunció con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil nueve, lo que fue reconocido por ambas partes en el proceso laboral de origen; luego, el segundo nombramiento fue el derivado del movimiento de personal signado el tres de noviembre de dos mil nueve, con fecha de efectividad del uno de noviembre de ese año, sin que contenga fecha de terminación en el puesto de “Supervisor B” en la dependencia denominada *presidencia*, subdependencia contacto ciudadano, lo que se advierte del contenido del nombramiento aludido.-----

Pues derivado del análisis del movimiento de personal se desprenden lo siguiente: (i) que tiene fecha de efectividad a partir del uno de noviembre de dos mil nueve, es decir, que a partir de esa fecha comenzó el último nombramiento de la actora; (ii) que se otorgó en el puesto de “supervisor B”; (iii) que en la parte inicial del documento se encuentra la leyenda “por este conducto me permito solicitar la (el) siguiente: **alta**”; y (iv) que se encuentra firmado por la actora, Director de Contacto Ciudadano y por el Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento. -----

En este contexto, si bien el movimiento de personal aludido se desprende, que el último nombramiento de la trabajadora no tiene fecha de terminación, no por ello el

nombramiento en cuestión debe terminar el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

Pues, en la fecha en que inició el vínculo de trabajo no existía disposición alguna que estableciera que todos los nombramientos tendrían como fecha de vencimiento el día que finalice el periodo constitucional del titular de la entidad pública. Máxime que la demandada con su caudal probatorio no acreditó que el último nombramiento fenecía el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

A la vez, el artículo 8 de la Ley burocrática en cita, vigente a la fecha en que se le expidió el último nombramiento con carácter definitivo, disponía que sólo por causa justificada y mediante procedimiento de responsabilidad, podían ser separados de su cargo los trabajadores de confianza, a no ser que se tratara *“de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9º o de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos”*, caso que no se advierte que configure la hoy actora al haber desempeñado el cargo de “Supervisor B” en la dependencia denominada presidencia, subdependencia contacto ciudadano.

De ahí que, lo analizado hasta este punto, permite concluir que el nombramiento que se otorgó a la hoy quejosa, tiene el carácter de definitivo con derecho a la estabilidad en el empleo y por ende a la reinstalación demandada, por lo que no es dable determinar que concluyó al momento de finalizar el periodo constitucional de la respectiva administración municipal, y por tanto, no obedece a ello la terminación de la relación de trabajo, sino a un despido que no se advierte que sea justificado.

En efecto, como lo determinó la autoridad federal en su ejecutoria que hoy se cumplimenta, la acción de **reinstalación** con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas condiciones que venía desempeñando, se prevé en los artículos 8º, 23 y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, aplicable al caso tomando en consideración que el último nombramiento que firmó la actora es con fecha efectiva del uno de noviembre de dos mil nueve, y que se dijo despedida el veintinueve de enero de dos mil diez. Lo anterior corroborado con la siguiente Jurisprudencia:

Época: Décima Época

Registro: 2002654

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2

Materia(s): Laboral

Tesis: 2a./J. 184/2012 (10a.)

Página: 1504

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA LES CONFIRIÓ EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012). Del artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 20 de enero de 2001, deriva que los servidores públicos de confianza tienen derecho a que, previamente a su cese, se les instaure procedimiento administrativo en el que se les otorgue garantía de audiencia y defensa conforme a los numerales 23 y 26 de la ley citada, salvo a los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. del indicado ordenamiento y los que sean designados y dependan directamente de ellos, lo que evidencia que aquéllos gozan del derecho a la estabilidad

en el empleo y pueden demandar la reinstalación o indemnización correspondiente en caso de que el despido sea injustificado. Por tanto, el hecho de que un servidor público tenga un nombramiento en una plaza considerada de confianza resulta insuficiente para declarar improcedente la acción de reinstalación, toda vez que en el mencionado artículo 8o. el legislador local amplió los derechos que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues incorporó el de la estabilidad en el empleo y, por ende, a los derechos derivados de esta prerrogativa en beneficio de esa clase de trabajadores.

Entonces, en acatamiento a la ejecutoria que hoy se cumplimenta, se concluye que el renovado nombramiento otorgado a la actora como "Supervisor B", con fecha efectiva del uno de Noviembre de dos mil nueve, es con carácter definitivo, sin fecha de terminación, por lo que no pudo haber terminado con la administración municipal del año dos mil nueve, ni se demostró que haya sido por tiempo determinado, por ende, **SE CONDENA** a la Entidad Demandada **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO,** a **REINSTALAR** a la actora *********, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta antes del despido injustificado del que fue objeto, el veintinueve de Enero de dos mil diez, en el cargo de "SUPERVISOR B" adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social, en el área de Contacto Ciudadano del Ayuntamiento demandado, considerándose como ininterrumpida la relación laboral; a su vez, **se condena** al pago de salarios caídos o vencidos e incrementos salariales y aguinaldo, estas prestaciones, a partir del despido injustificado del que fue objeto la actora, el veintinueve de Enero de dos mil diez y hasta la fecha en que sea debidamente reinstalada, debido a que la relación laboral se tiene como ininterrumpida. De ahí que, al entenderse la relación laboral continuada, el aguinaldo reclamado corre la misma suerte que la acción principal de reinstalación. Lo anterior en apoyo a la tesis siguiente

Época: Séptima Época

Registro: 242606

Instancia: Cuarta Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen 205-216, Quinta Parte

Materia(s): Laboral

Tesis:

Página: 9

AGUINALDO, PAGO DEL, EN CASO DE REINSTALACION, POR EL TIEMPO QUE DURE LA TRAMITACION DEL JUICIO LABORAL.

Si un trabajador demanda la reinstalación y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral se entiende continuada en los términos y condiciones convenidos como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que el trabajador tiene derecho al pago del aguinaldo durante el período comprendido entre la fecha de la injustificada rescisión de su contrato y aquella en que fuere materialmente reinstalado.

Amparo directo 6680/85. Federico González González. 13 de octubre de 1986. Cinco votos. Ponente: José Martínez Delgado. Secretaria: María Soledad Hernández de Mosqueda. Amparo directo 8130/85. Ana Leticia Ortiz Gutiérrez. 9 de junio de 1986. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: María Teresa Higuera.

En cuanto a las prestaciones relativas a salarios caídos e incrementos salariales y aguinaldo, de momento no se cuentan con los elementos suficientes para establecer sus montos, debido a que su condena abarca los posibles incrementos que se hayan generado en dicho periodo, por lo tanto, hasta que se cuente con dicha información, se determinara mediante planilla de liquidación las cantidades liquidadas correspondientes.-----

Sin embargo, en cuanto a las Vacaciones reclamadas durante el periodo de tramitación de este juicio a la reinstalación, es decir, de la fecha del despido alegado a su reinstalación, resulta improcedente su pago, conforme al artículo 40 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, puesto que el derecho a vacaciones se genera por el tiempo de prestación de servicios y si durante el periodo que transcurrió desde que el servidor público se dijo despedido, hasta que sea reinstalado no hay prestación de servicios, es claro que no surge el derecho a vacaciones, aun

cuando esa interrupción de la relación de trabajo sea imputable al patrón, pues ello sólo da lugar a que la relación de trabajo se considere como continuada, es decir, como si nunca se hubiera interrumpido y que se establezca a cargo del demandado la condena al pago de los salarios vencidos y si con estos quedan cubiertos los días que por causa imputable al demandado se dejaron de laborar, no procede el pago de vacaciones a ese periodo, ya que ello implicaría una doble condena, ya que los días de vacaciones, el patrón debe pagar los salarios del trabajador, como si este los laborara normalmente, por lo que con la condena al pago de salarios vencidos, se cubre dicho reclamo, ya que se le paga como si hubiera trabajado normalmente. Lo anterior en apoyo a la siguiente Jurisprudencia:-----

Época: Octava Época

Registro: 207732

Instancia: Cuarta Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Núm. 73, Enero de 1994

Materia(s): Laboral

Tesis: 4a./J. 51/93

Página: 49

VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL PERIODO EN QUE SE INTERRUMPIO LA RELACION DE TRABAJO.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a las vacaciones se genera por el tiempo de prestación de servicios, y si durante el período que transcurre desde que se rescinde el contrato de trabajo hasta que se reinstala al trabajador en el empleo, no hay prestación de servicios, es claro que no surge el derecho a vacaciones, aun cuando esa interrupción de la relación de trabajo sea imputable al patrón por no haber acreditado la causa de rescisión, pues de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, del rubro "SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO", ello sólo da lugar a que la relación de trabajo se considere como continuada, es decir, como si nunca se hubiera interrumpido, y que se establezca a cargo del patrón la condena al pago de los salarios vencidos, y si con éstos quedan cubiertos los días que por causa imputable al patrón se dejaron de laborar, no procede imponer la condena al pago de las

vacaciones correspondientes a ese período, ya que ello implicaría que respecto de esos días se estableciera una doble condena, la del pago de salarios vencidos y la de pago de vacaciones.

De la misma manera, por lo que respecta a la prima vacacional, toda vez que, se reclama concomitante a un despido injustificado y, en este caso, la condena al pago de salarios caídos hace improcedente su pago durante el tiempo que la trabajadora permaneció separado del trabajo, debe considerarse, además, que no podría incluirse el monto que por vacaciones y prima vacacional sea motivo de condena en el juicio laboral dentro del salario integrado, porque ello daría como resultado un doble pago, ya que en este se incluirían el pago de las vacaciones y la prima vacacional y, a la vez, sería la base para cuantificar las propias prestaciones, lo que, evidentemente, duplicaría la condena.

Cobra aplicación a ese mismo contexto, la siguiente Jurisprudencia:

Época: Décima Época

Registro: 2002097

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3

Materia(s): Laboral

Tesis: 2a./J. 142/2012 (10a.)

Página: 1977

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DEVENGADAS Y NO DISFRUTADAS. CUANDO EL TRABAJADOR HAYA SIDO REINSTALADO Y TENGA DERECHO A SU PAGO, ÉSTE DEBE HACERSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, por una parte, que aunque en principio la reinstalación deriva de la existencia de un despido injustificado, la causa directa de las prestaciones adicionales es la propia relación laboral y, por otra, que el salario a que se refiere el precepto aludido es válido para todos los días de trabajo, incluso los de descanso, y no sólo para efectos

indemnizatorios. Así, toda vez que las vacaciones son un derecho que los trabajadores adquieren por el transcurso del tiempo en que prestan sus servicios, cuya finalidad es el descanso continuo de varios días para reponer la energía gastada con la actividad laboral desempeñada, es claro que el salario que debe servir de base para pagarlas, cuando se ha reinstalado al trabajador que, adicionalmente, demandó su pago, es el integrado, previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que comprende los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Lo mismo ocurre respecto de la prima vacacional pues, conforme al artículo 80 de la legislación citada, consiste en un porcentaje fijado a partir de los salarios que corresponden al trabajador durante el periodo vacacional. Ahora bien, este criterio está vinculado con la reclamación de vacaciones y prima vacacional devengadas y no disfrutadas, pero no con las que se reclaman concomitantes a un despido injustificado pues, en este caso, la condena al pago de salarios caídos hace improcedente su pago durante el tiempo que el trabajador permaneció separado del trabajo. En este último supuesto debe considerarse, además, que no podría incluirse el monto que por estos conceptos sea motivo de condena en el juicio laboral dentro del salario integrado, porque ello daría como resultado un doble pago, ya que en éste se incluirían el pago de las vacaciones y la prima vacacional y, a la vez, sería la base para cuantificar las propias prestaciones, lo que, evidentemente, duplicaría la condena.

En esa tesitura, **SE ABSUELVE AL AYUNTAMIENTO DEMANDADO**, de pagar a la actora vacaciones y prima vacacional, a partir del despido injustificado suscitado el veintinueve de enero de dos mil diez, hasta el día en que sea debidamente reinstalada la actora, en razón de que las mismas van inmersas en el pago de salarios vencidos y en caso de condenarlas se estaría ante un doble pago.-----

En cuanto al reclamo que hace la actora, relativo a las cuotas ante la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco(hoy Instituto de Pensiones), así como al SEDAR, por todo el tiempo que dure el juicio laboral y por la inscripción y

aportaciones ante el IMSS. Ante dichos reclamos este Tribunal estima procedente la petición de la actora, en razón de que es una obligación de las Entidades públicas afiliar a todos los servidores públicos ante la Dirección de Pensiones del Estado, (ahora Instituto de Pensiones) para el otorgamiento de las pensiones y jubilaciones correspondientes, en los términos establecidos en la Ley vigente de dicho Instituto, concatenado con los artículos 56 fracciones V y XI y 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; además, por tratarse de un trabajador, cuya relación laboral se rige conforme al artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de lo que prevalece para quienes se sujetan a lo previsto por el apartado A, de esa disposición constitucional, el ayuntamiento demandado está obligado a inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que reciban únicamente asistencia médica, pues en el Estado de Jalisco, la seguridad social es proporcionada por el Instituto de Pensiones creado ex profeso para ese fin, por ende, se **CONDENA A LA DEMANDADA**, a cubrir las cuotas correspondientes que haya dejado de realizar a favor de la actora del juicio ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, SEDAR e IMSS, a partir del despido injustificado del que fue objeto la actora, el veintinueve de Enero de dos mil diez y hasta la fecha en que sea debidamente reinstalada. Estas prestaciones sus montos los determinan las instituciones correspondientes de acuerdo a los procedimientos administrativos que ellas indiquen para tal efecto.-----

VI.- Exige la accionante el pago de 3 TRES HORAS EXTRAS DIARIAS de lunes a viernes de cada semana, precisando en su ampliación de demanda que su horario era de las tres de la tarde a las nueve de la noche, pero se vio en la necesidad de laborar de lunes a viernes hasta las doce de la noche, por lo que en consecuencia laboraba diariamente 3 horas extras. Añadiendo que nunca disfruto la media hora de descanso. A dicha petición la demandada alegó que el actor, siempre contó con un horario de las 15:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes de cada semana, con media hora para tomar alimentos fuera de su área de trabajo; además invocó la excepción de prescripción que prevé el numeral 105 de la Ley

Burocrática Estatal de la materia. Bajo esa tesitura, los que resolvemos estimamos que es primordial analizar la excepción opuesta por la entidad, la cual al ser analizada se considera procedente, así que, conforme lo dispone el numeral citado, se encuentra prescrito dicho reclamo, con anterioridad al año inmediato en que se hizo exigible, es decir, se hizo exigible el dos de Julio de dos mil diez, con la ampliación de demanda, entonces el año que no está prescrito sería del dos de Julio de dos mil nueve, al día en que limitó su reclamo el veintinueve de Enero de dos mil diez. Así las cosas, lo procedente es absolver y **SE ABSUELVE AL AYUNTAMIENTO DEMANDADO**, de pagar a la accionante HORAS EXTRAS, con anterioridad al dos de Julio de dos mil nueve, por estar prescrito.-----

Luego, al analizar el reclamo de horas extras por el periodo no prescrito, conforme a las facultades que la Ley le confiere a esta autoridad, se estima que se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, sin tiempo para ingerir alimentos o reposo de energías en ese periodo tan prolongado, lo que se deduce por lógica, de acuerdo a la naturaleza humana, que ningún cuerpo humano podría resistir tanto tiempo, sin tomar alimento alguno, descanso, reposo y sin realizar sus necesidades fisiológicas, todos los días de lunes a viernes, en el horario de las tres de la tarde a las doce de la noche, es decir, de las quince a las veinticuatro horas durante el periodo reclamado, en su ampliación de demanda; de ahí que, no se hace creíble la jornada que refiere desempeño en ese tiempo; máxime que no preciso en su demanda quien le pidió laborar el horario que refiere, lo que hace increíble las jornadas de trabajo que señala, por tanto, se estima inverosímil el reclamo de pago de horas extras que pretende, apreciando en conciencia los hechos, sin sujetarse a reglas fijas y resolviendo a verdad sabida y buena fe guardada, en términos del artículo 136 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 841 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la Ley primeramente invocada, teniendo aplicación las Jurisprudencias siguientes:-----

No. Registro: 175,923
Jurisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Época

Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Tesis: 2a./J. 7/2006
Página: 708

HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.

Tratándose del reclamo del pago de horas extras de labores, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia o sobre la duración de la jornada, siempre corresponde al patrón, pero cuando la acción de pago de ese concepto se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de control constitucional, debe resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia.

Contradicción de tesis 201/2005-SS. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 20 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 7/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de enero de dos mil seis.

No. Registro: 207,780
Jurisprudencia
Materia(s): Laboral
Octava Época
Instancia: Cuarta Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
65, Mayo de 1993
Tesis: 4a./J. 20/93
Página: 19
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 228, página 149.

HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSIMILES.

De acuerdo con el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Sala, la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado cuando exista controversia sobre el particular, siempre corresponde al patrón, por ser quien dispone de los medios necesarios para ello, de manera que si no demuestra

que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame, pero cuando la aplicación de esta regla conduce a resultados absurdos o inverosímiles, las Juntas deben, en la etapa de la valoración de las pruebas y con fundamento en el artículo 841 del mismo ordenamiento, apartarse del resultado formalista y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón. Por tanto, si la acción de pago de horas extras se funda en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como cuando su número y el período en que se prolongó permiten estimar que el común de los hombres pueden laborar en esas condiciones, por contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer sus energías, no habrá discrepancia entre el resultado formal y la razón humana, pero cuando la reclamación respectiva se funda en circunstancias inverosímiles, porque se señale una jornada excesiva que comprenda muchas horas extras diarias durante un lapso considerable, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, inclusive absolviendo de la reclamación formulada, si estiman que racionalmente no es creíble que una persona labore en esas condiciones sin disfrutar del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, pero en todo caso, deberán fundar y motivar tales consideraciones.

Contradicción de tesis 35/92. Entre las sustentadas por el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Fernando Estrada Vázquez.

Tesis de Jurisprudencia 20/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión privada del doce de abril de mil novecientos noventa y tres, por cinco votos de los señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte.

En virtud de lo anterior, al resultar inverosímil el reclamo de las horas extras que reclama la actora *****, como consecuencia hace incuestionable la absolución al **AYUNTAMIENTO DEMANDADO**, de pagar a la trabajadora actora cantidad alguna por concepto de horas extras y media hora de descanso por el periodo reclamado, por los motivo y razones expuestos.-----

VII.- A su vez, la actora reclama bajo el inciso h) de su ampliación de demanda, como prestaciones el concepto de despensa consistente en \$***** quincenales y como ayuda de transporte la cantidad de \$***** quincenales, por el tiempo que dure el juicio. Mientras que la demandada señala que son prestaciones extralegales, lo cual considera que le corresponde a la actora probar su procedencia. Luego, al resolver el asunto a verdad sabida y buena fe guardada,

conforme al artículo 136 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se advierte de las copias simples de los recibos de pago de salario que ofreció la trabajadora como pruebas, y que no fue combatida por su contraria su autenticidad, lo cual adquiere una presunción a favor del trabajador, apreciándose en las copias de los recibos de pago, en especial los del último mes que le fue pagado a la actora, es decir, Diciembre de 2009, el salario quincenal de la operaria, se integraba con el salario base de \$*****pesos, adicionando quincenalmente el concepto despensa \$***** pesos y ayuda de transporte \$***** pesos, arrojando la cantidad total de \$***** **DE FORMA QUINCENAL.** Esto, en apego al artículo 46 fracción IV segundo párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice: "el salario de los servidores públicos en ningún caso puede ser disminuido"). De ahí que, resulta improcedente condenar de manera independiente del salario, el concepto de ayuda de transporte y despensa, pues como se dijo anteriormente esos conceptos van incluidos en el salario integrado de la trabajadora y de ordenarse su condena por separado se podría dar un doble pago en perjuicio de ente demandado.---

Entonces al reclamar la actora el pago de salarios devengados y no pagados por el H. Ayuntamiento demandado, del 01 al 29 de Enero de 2010. Argumentando la demandada que oportunamente cumplió con dicha prestación, cuando la accionante tuvo derecho a ella. Ante esa controversia, al ente demandado le corresponde demostrar haber pagado esos salarios, debido a que en autos quedó demostrado que si laboro del 01 al 28 de enero de 2010, ya que el día 29 de ese mes y año, al inicio de su jornada ocurrió el despido alegado, y ese día fue contemplado como salario vencido, por lo que de condenarse nuevamente se estaría ante un doble pago sin justificación alguna. Así las cosas, respecto al caudal probatorio ofrecido por el empleador, con ninguna muestra haber cubierto a la actora los salarios reclamados del 01 al 28 de Enero de 2010, por ende, resulta incuestionable su adeudo, bajo esa directriz, SE CONDENA A LA DEMANDADA, a pagar a la actora los SALARIOS DEVENGADOS, por el periodo del 1uno al 28 veintiocho de Enero de 2010 dos mil diez.-----

Entonces, al contar con los elementos suficientes para cuantificar los salarios del 01 al 28 de Enero de 2010, se procede a realizar las operaciones aritméticas correspondientes para determinar su monto. Tomando en consideración que el salario para su cuantificación es a razón de \$***** **DE FORMA QUINCENAL**, mismo que se divide entre 15 días para determinar el salario diario de \$*******pesos.**-----

Así las cosas, tomando en cuenta el periodo del 01 al 28 de enero de 2010, arroja como salarios devengados el monto siguiente:

<i>Periodo del 1 al 28 de enero 2010.</i>	<i>Salario diario</i> \$*****	<i>Total=</i>
28 días x	\$*****=	\$***** <i>monto por salarios devengados.</i>

Por lo cual, para la cuantificación de las prestaciones a las que fue condenado el Ayuntamiento demandado en la presente resolución, una vez que se informe sobre si se genero algún incremento en el puesto de la actora, deberá de tomarse como base el salario quincenal integrado por el salario base, concepto de despensa y transporte, que demostró percibir la actora del presente juicio, el cual asciende a la cantidad de \$*******DE FORMA QUINCENAL.--**

Así mismo y para efectos de estar en posibilidad de cuantificar los posibles incrementos que se hubieren generado al salario en el puesto que desempeñaba la actora, SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, para que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este Tribunal, si se genero algún incremento al salario en el puesto de "SUPERVISOR B", a partir del veintinueve de enero de dos mil diez, a la fecha en que tenga a bien rendir el informe solicitado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.----

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria y los numerales 1, 2, 22, 23, 40, 54, 114, 128, 129, 135, 136, 140 y demás relativos y aplicables de la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios se resuelve bajo las siguientes:-----

P R O P O S I C I O N E S :

PRIMERA.- La actora *****, probó en parte su acción y la demandada **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO**, justificó parcialmente sus excepciones, en consecuencia:-----

SEGUNDA.- SE CONDENA A LA ENTIDAD DEMANDADA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, a REINSTALAR a la actora *****, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta antes del despido injustificado del que fue objeto, el veintinueve de Enero de dos mil diez, en el cargo de "SUPERVISOR B" adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social, en el área de Contacto Ciudadano del Ayuntamiento demandado, considerándose como ininterrumpida la relación laboral; a su vez, **se condena a la demandada**, al pago de salarios caídos o vencidos e incrementos salariales y aguinaldo, así como a cubrir las cuotas correspondientes que haya dejado de realizar a favor de la actora del juicio ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, SEDAR e IMSS, todas estas prestaciones a partir del despido injustificado del que fue objeto la actora, el veintinueve de Enero de dos mil diez y hasta la fecha en que sea debidamente reinstalada. Además a pagar a la actora la cantidad de **\$*****pesos**, por concepto de salarios devengados del 01 al 28 de enero de 2010. Lo anterior de conformidad a los razonamientos establecidos en los considerandos de éste fallo.-----

TERCERA.- SE ABSUELVE A LA DEMANDADA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO,

de pagar a la actora vacaciones y prima vacacional, a partir del despido injustificado suscitado el veintinueve de enero de dos mil diez, hasta el día en que sea debidamente reinstalada. Además se absuelve al empleador de pagar a la actora cantidad alguna por concepto de horas extras y media hora de descanso por el periodo reclamado. Lo anterior de conformidad a lo razonado en los considerandos de la presente resolución.-----

CUARTA.- SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, para los efectos indicados en el último considerando.-----

QUINTA.- Se comisiona al Secretario General de este Tribunal, a efecto de que remita copia certificada del presente laudo, en vía de notificación y cumplimiento a la **Ejecutoria de Amparo Directo 1037/2015 y al oficio 3927/2016 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito**, para los efectos legales a que haya lugar.-----

Se hace del conocimiento de las partes que, a partir del 01 primero de Julio de 2016 dos mil dieciséis, por acuerdo Plenario el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, quedó integrado de la siguiente manera: Magistrado Presidente Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza, Magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García y Magistrado José de Jesús Cruz Fonseca, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.-----

Así lo resolvió por unanimidad de votos el Pleno que integra este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, integrado de la siguiente manera: Magistrado Presidente Jaime Ernesto de Jesús Acosta Espinoza, Magistrada Verónica Elizabeth Cuevas García y Magistrado José de Jesús Cruz Fonseca, que actúan ante la presencia de la Secretario General, abogada Patricia Jiménez García, que

autoriza y da fe. Proyectó como Secretario de Estudio y
Cuenta, abogado José Juan López Ruiz.-----
LRJJ/*.